

HALLAZGOS DEL PRIMER FORO DE GOBERNANZA CLIMÁTICA INCLUSIVA

Opinión y participación pública en
América Latina

Daniela Stevens y MK Vereen

Sobre el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer

Libertad, justicia y solidaridad son los principios base de la labor de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una fundación política, vinculada al partido político Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU). Konrad Adenauer (1876-1967), cofundador del CDU y primer canciller alemán, logró unir las tradiciones social-cristiana, conservadora y liberal. Su nombre es sinónimo de la reconstrucción democrática de Alemania, la consolidación de políticas exteriores en una comunidad de corte transatlántico, la visión sobre la Unión Europea y la orientación de la economía social del mercado. Su legado intelectual continúa siendo para nosotros tanto una misión como un compromiso.

Para la KAS, la seguridad energética y el cambio climático se han convertido en una pieza importante en la estructura y el mantenimiento de un orden social democrático. En este contexto, el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) se diseñó como una plataforma de diálogo, con el fin de impulsar el proceso de toma de decisiones políticas sobre estos temas. Su objetivo central es concientizar y sensibilizar a los actores políticos en temas de cambio climático, medio ambiente y seguridad energética en América Latina. El programa organiza foros de discusión regional, conferencias y seminarios en colaboración estrecha con las oficinas locales y otros programas regionales de la Fundación Konrad Adenauer en Latinoamérica, así como con organizaciones asociadas nacionales e internacionales, e igualmente se entregan informes, publicaciones especializadas y estudios.

En este contexto, junto con el Diálogo Interamericano, se realizó el Foro de Gobernanza Inclusiva, para encontrar formas accionables para fomentar la participación de la sociedad latinoamericana en la política climática, ayudando a los gobiernos a identificar e implementar comunicación bidireccional y posibilidades para la acción colaborativa y la conexión de la sociedad civil con los tomadores de decisiones clave. Otros objetivos particulares incluyeron: proponer pasos prácticos a los gobiernos y la sociedad civil para lograr una visión conjunta de combatir el cambio climático con justicia e inclusión, fomentar la participación en las diferentes etapas del proceso de formulación de políticas, generar confianza gobierno-sociedad y promover la transparencia y la rendición de cuentas.

© 2023, Diálogo Interamericano. Primera Edición.
Diálogo Interamericano
1155 15th St. NW, Suite 800 Washington, DC 20005
Tel: + 1 202-822-9002 / Fax: 202-822-9553
Correo electrónico: energy@thedialogue.org

Autoras:
Daniela Stevens y MK Vereen

Este informe fue posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y su Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) en colaboración con el Diálogo Interamericano. Agradecemos especialmente a Robert Helbig, Director Interino de EKLA; Anuska Soares, Coordinadora del Proyecto de EKLA; y Johanna Pastor, Coordinadora de Comunicación de EKLA por apoyar este proyecto. Se puede encontrar detalles sobre el Primer Foro de Gobernanza Climática Inclusiva en <https://www.thedialogue.org/events/evento-en-linea-primer-foro-de-gobernanza-climatica-inclusiva-opinion-y-participacion-publica-en-america-latina/>.

Imagen de Portada: Foto de Tom Page para *Helsinki Times*, CC BY-SA 2.0. La imagen ha sido editada con una cubierta azul.

Este informe es un producto del Programa de Transición Energética y Clima del Diálogo Interamericano. Las opiniones y recomendaciones en él contenidas son de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de los directores, el personal o los miembros del Diálogo Interamericano ni de sus socios, donantes, y/u otras instituciones de apoyo. Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. El Diálogo Interamericano es una institución imparcial, comprometida con la independencia intelectual, transparencia y responsabilidad. Ocasionalmente invitamos a nuestros donantes a participar de nuestras actividades, pero el trabajo del Diálogo Interamericano no está influenciado de ninguna forma por sus donantes. Nuestros donantes no tienen ningún control sobre lo escrito, la metodología, el análisis, o los resultados de las labores de investigación del Diálogo.

Índice

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 5

HALLAZGOS DEL FORO..... 6

Panorama de la opinión pública en América Latina 6

Mecanismos de comunicación y protección para la sociedad civil 8

Colaboración entre el sector privado y la sociedad civil 10

LLAMADO A LA ACCIÓN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS..... 13

BIOGRAFÍAS DE PANELISTAS 15

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 19

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Las decisiones de política climática en América Latina usualmente se concentran en los tomadores de decisiones públicos, con aportes e influencia del sector privado. En contadas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil (OSC) o poblaciones estructuralmente vulnerables han tenido la oportunidad de acceder a los debates que serán decisivos para su futuro. A menudo, las consultas o mesas redondas entre gobierno y distintas partes interesadas de la sociedad civil carecen de resultados implementables y rara vez requieren de seguimiento. Barreras como la falta de canales de comunicación, la marginación de ciertos grupos, el desinterés de ambas partes, o una profunda desconfianza en el gobierno se interponen en el camino. La ausencia de canales de comunicación entre estado y sociedad ocasiona que los gobiernos pasen por alto propuestas y necesidades que podrían mejorar la gobernanza climática. Peor aún, esto resulta en la pérdida de un potencial contrapeso cuya participación independiente podría servir como un mecanismo de rendición de cuentas cuando los compromisos climáticos no se concretan o las medidas no cumplen con los estándares establecidos por los mismos gobiernos.

Con el objetivo de explorar estos temas, el Diálogo Interamericano y el Programa Regional EKLA de la Fundación Konrad Adenauer realizaron el Primer Foro de Gobernanza Climática Inclusiva el 8 de junio de 2023. Convocaron a diversos panelistas a través de la región para discutir estos temas en tres mesas redondas y sugerir mejores prácticas y recomendaciones de política. El foro, disponible en **YouTube**, fue publicitado en toda la región y conducido en español con traducción simultánea al portugués para facilitar una amplia participación regional.

Los objetivos de los 3 paneles se describen a continuación:

1) Sociedad civil latinoamericana: corresponsable de la lucha contra el cambio climático

Esta discusión se propuso averiguar qué narrativa impera sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático entre la ciudadanía, así como diferenciar opinión por

grupos etarios, género, grupos indígenas y otros grupos subrepresentados. Los participantes, expertos en encuestas e inteligencia artificial (IA) discutieron si la sociedad civil considera que su gobierno es responsable de combatir y adaptarse al cambio climático, o si atribuye responsabilidad a distintos niveles o ramas de gobierno. Asimismo, consideraron cómo combatir la sub-representación de grupos vulnerables en encuestas o redes sociales y cómo canalizar la información obtenida con IA y encuestas para proponer indicadores y soluciones prácticas.

2) Simbiosis productivas: relaciones entre gobierno y organizaciones ambientalistas

La segunda mesa planteó un diálogo entre gobiernos federales, locales y organizaciones ambientalistas para conocer cómo evalúan las organizaciones la receptividad del gobierno, cómo podrían mejorar los canales existentes de comunicación, y compartir mejores prácticas. Representantes de gobiernos federal y local respondieron cómo dan seguimiento a las contribuciones ciudadanas y las organizaciones y qué más se puede hacer para proteger la vida y la integridad de activistas ambientales en la región. Los representantes de la sociedad civil compartieron su evaluación y sugerencias para mejorar la comunicación.

3) De la propuesta a la práctica: explorando instrumentos en sectores productivos

El objetivo de esta mesa fue averiguar del sector privado cuáles son las claves para alcanzar metas climáticas de modo inclusivo con las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, así como escuchar de OSCs qué estrategias han funcionado, y cuáles no, para generar una participación significativa de la sociedad civil en el desarrollo sustentable y objetivos climáticos.

Finalmente, se discutió la contabilidad del sector financiero y su contribución a la carbono-neutralidad con ejemplos de programas de reducción de emisiones para el sector privado, que a la vez sirven como catalizadores de financiamiento verde.

HALLAZGOS DEL FORO

Panorama de la opinión pública en América Latina

Se prevé que el cambio climático tendrá impactos negativos cada vez mayores en la productividad, forma de vida y seguridad de los grupos más vulnerables en la región. Ante este panorama, la región ha visto progreso en los últimos años en términos del reconocimiento de la importancia del acceso a información ambiental y climática y de las barreras a la participación pública. A pesar de los avances, los niveles de confianza en el gobierno, y en algunos países la libertad de expresión, se encuentran con un pronóstico desalentador. En la primera mesa, los expertos pintaron un cuadro de la diversidad de la opinión pública sobre el cambio climático en América Latina y su rol en la formación de políticas.

Marcos Cuevas, jefe de producto de Citibeats, delineó su investigación sobre las tendencias de distintas “opiniones públicas” en la región. La compañía Citibeats ha creado “monitoreos” que recogen información desde las redes sociales para dar seguimiento a narrativas sociales sobre diferentes temas. Dado el monitoreo constante de los posts de redes sociales, el producto funciona como una “encuesta en tiempo real.” Citibeats ha desarrollado tres distintos monitoreos para América Latina relacionados al clima. Estos incluyen: riesgos sociales, sostenibilidad, y desarrollo sostenible.

De los monitoreos se derivan múltiples tendencias generales. Primero, el discurso principal de la mayoría de la población de América Latina cuando publica sobre cambio climático, gira en torno a los impactos en su vida cotidiana, ya sean económicos, regulatorios, o físicos en infraestructura. Las publicaciones se centran mayormente en cómo responsabilizar al gobierno en la solución de problemas causados por impactos directos. Sin embargo, se puede seleccionar ciertas categorías dentro de los datos para evaluar cómo las tendencias cambian según la demografía. El género tiene un gran impacto sobre el

contenido de opiniones. Por ejemplo, para las mujeres en México, sus preocupaciones sobre el cambio climático se relacionan con acceso a energía, salud y nutrición en primera infancia. También les preocupa el mar, los océanos, y la seguridad hídrica. Estas son las mismas preocupaciones que expresan las mujeres en Brasil. En cambio, los hombres mexicanos hablan más de energía renovables, de cómo el cambio climático afecta su movilidad, educación, y los ecosistemas. Las mujeres se centran en una visión más práctica y les preocupa cómo el cambio climático afectará sus obligaciones cotidianas como cuidadoras. Las publicaciones de los hombres en la región se relacionan con cómo el discurso debe cambiar, y con preocupaciones sistémicas y de largo plazo. Entonces, hablando de cambio climático, las mujeres mexicanas tienen más en común con las mujeres brasileñas que con los hombres mexicanos.

Aunque el análisis con IA de redes sociales puede ser una herramienta muy útil para evaluar la opinión pública, tiene sus limitaciones. Mientras que se puede geolocalizar las opiniones públicas, la brecha digital limita lo que se puede encontrar del mundo rural. Por ejemplo, si se quisiera saber la opinión de los habitantes de la Amazonía, la solución es entrevistarlos directamente. Otro obstáculo es que, en las redes sociales en la región, solo el treinta por ciento de las voces son de mujeres. En casos extremos, las personas no pueden publicar sus reflexiones en las redes debido a represión política, o en otros casos simplemente por temor de alguna repercusión social.

Es necesario reconocer estos límites antes de utilizar este tipo de análisis para formar conclusiones. Dado que poblaciones históricamente marginalizadas también son excluidas de la formación de políticas públicas, depender únicamente del análisis con IA de redes sociales para informar la toma de decisiones mantendría esta tendencia perversa de exclusión. Un ejemplo de cómo se puede superar este reto es prestar atención a los medios de comunicación que se usan en las comunidades rurales.

Por ejemplo, Citibeats tiene un programa en África para escuchar a radios comunitarias, y Marcos Cuevas demostró interés en implementar este programa en Latinoamérica.

Carmelo Polino, Investigador Académico de La Universidad Oviedo, elaboró sobre las conclusiones de Cuevas, explicando que la estratificación social genera diferentes respuestas al cambio climático en el análisis de encuestas tradicionales. En general, las mujeres tienen mayor sensibilidad al cambio climático, y hay mayor visibilidad de su aceptación y respuesta al fenómeno. Por otro lado, nuevas generaciones están demandando más de sus gobiernos en cuanto a políticas de cambio climático. De acuerdo con Cuevas, Polino enfatizó que se sabe más sobre lo que opina poblaciones privilegiadas que poblaciones marginalizadas. Sobre todo, se sabe más de lo que opina la población adulta y urbana en América Latina. Para algunos países, urbanizados, esta población representa la mayoría de los ciudadanos, pero en otros países, no. Dicha tendencia exacerba la falta de conocimiento sobre las opiniones de las poblaciones excluidas.

Además de los análisis de redes sociales, hay múltiples fuentes de datos sobre opinión relacionada a temas ambientales y climáticos en América Latina, como las encuestas científicas. Desafortunadamente, no todas son sistemáticas, explicó Polino. Para poder comparar las tendencias a lo largo de tiempo, es necesario integrar series de tiempo, estandarizar el formato, el tipo de pregunta, la audiencia, entre otros factores metodológicos. Hasta ahora, esta estandarización no ha ocurrido entre las distintas encuestas, lo que impide realizar investigación combinando las fuentes para llegar a respuestas más matizadas. Desde la perspectiva académica de Polino, es necesario no solo mejorar significativamente la calidad de los datos disponibles, sino una mejor conceptualización teórica de cultura climática.

El gran volumen de información publicada en redes sociales por ciudadanos en Latinoamérica muestra su interés en participar y opinar sobre el cambio climático. Sin embargo, Cuevas argumentó que según los monitoreos de Citibeats, la gente está viviendo en modo de sobrevivencia, de día a día; a pesar de que no se observan grandes manifestaciones, el nivel de desconfianza en los gobiernos es muy alto y a punto de crear inestabilidad política. Polino apuntó a la causa raíz de esta situación, exponiendo que no se puede desanclar la participación pública en la formación políticas de cambio climático con la profunda desigualdad estructural que existe en Latinoamérica.

Por esto, hay que ver al cambio climático desde un marco integral que considere la historia particular de cada lugar y las identidades marginalizadas. Mientras que problemas de justicia ambiental intergeneracional se ven a través de todo el continente, hay diferentes retos y miradas sobre el cambio climático en cada país.

Desde una perspectiva de educación ciudadana, Olimpia Castillo, coordinadora general en Comunicación y Educación Ambiental S.C., estuvo de acuerdo con que hay un apetito por participar por parte de la sociedad civil. Reconoció que se ha pasado desde un desconocimiento general hacia cada vez más información, datos y consideraciones climáticas en el discurso. El cambio climático llama la atención de la ciudadanía, y los gobiernos han empezado a responder. Por ejemplo, han nacido nuevas instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, cuya labor es traducir la información de corte académico al público. Incluso en el ámbito municipal, se han creado instituciones que trabajan temas ambientales, incluyendo al cambio climático.

Como un ejemplo en donde la participación fue efectiva, Castillo mencionó el Acuerdo de Escazú*, con apenas cinco años de vigencia. La construcción del acuerdo fue un proceso único, el cual Castillo espera pueda replicarse futuro. El acuerdo se construyó con las organizaciones de sociedad civil, que tuvieron una voz fuerte en su elaboración. Estas organizaciones estuvieron presentes en las reuniones de preparación y negociación del acuerdo, y, según Castillo, su impacto fue indeleble. Por ejemplo, el Artículo 9 refiere a la protección de las personas defensoras de la naturaleza, y su inclusión fue una recomendación directa de organizaciones de sociedad civil (OSCs). El Acuerdo de Escazú también aborda la desigualdad estructural, pero habla de “personas en situación de vulnerabilidad,” no de “personas vulnerables,” una diferenciación importante que indica que las personas están empoderadas a pesar del contexto adverso.

Como reacción a la intervención de Citibeats, Castillo argumentó que los datos de IA muestran qué quiere cierta gente, de qué habla, qué consume, pero no cuentan qué opinan aquéllos quienes se enfrentan directamente con

* El Acuerdo Regional, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Ver <https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/regional-agreement-access-information-public-participation-and-justice/texto-acuerdo-regional>. Consultado el 26 de junio de 2023.

con el deterioro ambiental y el cambio climático, que son el resultado de este modelo de desarrollo. Mencionó que, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú no solo se enfoca en el acceso a la información, sino en que esta información llegue a través de medios culturalmente adecuados para que sea comprensible. Esto significa a veces comunicarse fuera de redes sociales, en otros idiomas, e implementar mecanismos de comunicación con analfabetas.

Sin embargo, como apunta Polino, hay dos campos de creencias sobre la formulación de políticas públicas. Uno cree en la “democracia participativa,” que postula la importancia de que se considere a todas las voces en la formación de políticas. Por otro lado, otros defienden la “democracia informativa,” que se adhiere al tecnocratismo o creencia de que los tecnócratas deben informar la política y la opinión pública no añade valor. El enfrentamiento entre estas visiones, la predominancia del modelo tecnocrático, y en especial, el descuido e indiferencia de las opiniones de los que nunca han tenido espacio o habilidad manifestarse, ha llevado un déficit institucional y a la crisis de credibilidad actual en Latinoamérica. Hay una profunda desconfianza en la capacidad de las instituciones públicas, y ninguna política valdrá si no mejora la confianza en el gobierno. Para sanar la relación, Polino recomienda que gobiernos abran canales de intermediación y diálogo con activistas y OSCs, especialmente los que trabajan con grupos marginalizados, y que se aproveche la sinergia entre OSCs, y científicos sociales. La comunicación es igualmente importante, dado que, hasta ahora, encuestas demuestran que la mayoría de los latinoamericanos no sabe cómo participar en la formación de políticas, incluso considerando la larga historia de activismo ambiental en la región.

Mecanismos de comunicación y protección para la sociedad civil

Las relaciones recíprocas entre gobiernos y organizaciones ambientalistas son fundamentales para facilitar la participación en política climática. Desafortunadamente, en América Latina, esto suele depender de la postura o disposición del gobierno en el poder. Las administraciones en la región tienden cambiar de manera pendular, girando de gobiernos anti-extractivistas a otros que favorecen las inversiones, independientemente de su inclinación de izquierda o derecha. Esta situación desestabiliza el rol de las OSCs, en particular el de las ambientalistas.

Liuca Yonaha, vicepresidente para Instituto Talanoa, un laboratorio de ideas en Brasil, delineó una breve historia de cómo los cambios de administración han alterado las relaciones con OSCs ambientalistas en Brasil durante los últimos cinco años. Durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el líder conservador emitió un decreto que eliminó cualquier mecanismo de participación para OSCs— sean consejos, grupos de trabajos, comités, espacios participativos intergubernamentales, u otros espacios de participación de sociedad civil. Yonaha destacó que bastó un decreto presidencial, que no necesitó la aprobación legislativa, para revocar la participación ciudadana en la toma de decisiones. A partir de ahí, según ella, se desestructuró el plan para la protección de la Amazonía.

Ana Toni, Secretaria de Cambio Climático para el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, comentó que era necesario en Brasil aprendiera esta “dura lección” de que la democracia todavía es frágil. Ante este escenario precario, Toni afirmó que es fundamental crear instituciones que no se desmoronen con una firma presidencial. Yonaha y Toni acordaron que el país debería crear espacios y mecanismos de participación que estén protegidos constitucionalmente, y de la importancia de la transparencia y de la democratización de la ciencia y los datos disponibles para evitar retrocesos.

Desde el punto de vista de la administración actual del presidente Lula da Silva, la participación pública, y en especial las consultas públicas, son fundamentales para la creación de nuevos planes de acción ambiental. La lucha contra el cambio climático es un valor transversal en el gobierno de Lula, y por eso, el trabajo de Toni consiste en coordinar las acciones de 17 ministerios. Mientras que la participación y la suma de las partes interesadas es fundamental para generar sinergias, la secretaria reconoció que en este momento las tensiones que existen entre estas partes complican su habilidad de colaborar para lograr metas de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, con la reciente aprobación del proyecto de ley 490 en la Cámara baja¹ que limita el reconocimiento de nuevas reservas indígenas, distintos grupos indígenas han bloqueado carreteras y protestado en las calles para demostrar su oposición. Aunque el presidente Lula podría vetar el proyecto si el Senado lo aprueba, el Congreso podría anular su veto. Toni enfatizó que mejorar la educación climática puede cerrar las brechas de entendimiento, pero mientras tanto hay que aprender del pasado, y encontrar soluciones colaborativas.

Mientras que Yonaha explicó que la presión de la sociedad civil es una importante salvaguarda contra los retrocesos, la secretaria explicó que a la vez hay que indagar qué puede dar el gobierno a la ciudadanía. Los gobiernos sólo tienen cuatro años para demostrar cambios y progreso concreto a la sociedad civil. Toni mencionó programas específicos como incentivos para paneles solares, o mecanismos más participativos. Como explicó Cuevas en la primera mesa, las preocupaciones de la sociedad civil en América Latina relacionadas al cambio climático tienen que ver mayormente con su día a día. Dado ese horizonte temporal limitado, es preciso no solo fomentar diálogos sino priorizar planes para entregar cambios y beneficios concretos. La presión de la sociedad civil ayuda a que el gobierno sepa qué debe priorizar.

Sin embargo, manifestarse contra el gobierno o las corporaciones no es una opción segura en la región. México y Brasil figuran consistentemente entre los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. Durante 2021, Global Witness registró 200 asesinatos de defensores del medioambiente a escala global.² Más de un cuarto (54) de estos asesinatos ocurrieron en México, y 26 en Brasil, mientras que Latinoamérica representa dos tercios de los homicidios. Este problema afecta particularmente a grupos indígenas, quienes, a pesar de constituir sólo el 5 por ciento de la población mundial, representan el 39 por ciento de los asesinatos registrados por Global Witness desde 2012.³

Carlos Asúnsolo, abogado para la organización mexicana Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., explicó que la violencia va más allá de estas cifras. Según él, cuando pensamos en la violencia contra las personas defensoras del medioambiente, solemos imaginar casos de amenazas o muertes que son debidamente investigadas y se difunden a través de los medios de comunicación; es decir, pensamos en casos de violencia discretos. Asúnsolo explicó que los casos se anclan más profundamente en la violencia estructural e institucional, por lo que es preciso expandir nuestra definición de violencia para entender cómo se vincula con la gama de barreras contra la participación ciudadana. Cuando no hay mecanismos de participación, o la consulta previa no es suficiente, los proyectos o megaproyectos de gobierno no toman en cuenta las voces comunitarias, por lo que los ciudadanos recurren a la manifestación. La exclusión resulta en violencia estructural contra personas viviendo alrededor de megaproyectos, así como en violencia discreta contra manifestantes.

Asúnsolo argumentó que el litigio es solo una de las múltiples herramientas, no la única ni la más importante, para crear normas ambientales y climáticas y para establecer responsabilidad acerca de la violación de derechos ambientales. En países como México, los derechos medioambientales y la libertad de expresión han ido retrocediendo. El grupo de expertos legales CEMDA mantiene una posición retroactiva de intentar frenar estas medidas regresivas. Por ejemplo, Asúnsolo mencionó el litigio para combatir la desaparición del fondo de cambio climático que está en la ley de cambio climático mexicana.

Otro caso ejemplar es el Tren Maya, un proyecto en México que vincula la construcción de una vía ferroviaria con varios desarrollos turísticos para atraer visitantes a la región sureste. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental (EIA) no reflejó esta intención. El EIA fue fragmentado e incompleto, analizando distintos proyectos como si fueran aislados en lugar de contemplar el impacto holístico del tren, como la cantidad de turistas que visitarían o la cantidad de agua que consumirían. Desde CEMDA, se comenzaron a ver numerosos casos de litigio, lo cual fue una señal de alarma. El poder judicial dictó medidas cautelares en diversos juicios de amparo para evitar daños irreparables al ecosistema, pero en respuesta a las múltiples suspensiones, el gobierno federal aprobó un decreto que declaró las obras de infraestructura como tema de seguridad nacional. Esto permitió al gobierno continuar las obras en detrimento de las prerrogativas provistas constitucionalmente como el derecho a un medio ambiente sano. No mucho después, este decreto también fue objeto de litigio y la corte declaró su inconstitucionalidad. La respuesta del gobierno fue otro decreto específicamente sobre el Tren Maya para declararlo obra de seguridad nacional y trasladar la responsabilidad de su construcción y gestión a la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso del Tren Maya muestra la dinámica que algunos megaproyectos generan alrededor de comunidades y territorios, y cómo un gobierno puede, con un decreto presidencial, bloquear la participación y los derechos de la sociedad civil, o incluso atacar a los opositores.

Rafael Montalvo, presidente del Municipal de Ticul en el estado de Yucatán, México, coincidió con Asúnsolo en que no es el momento de mayor bonanza en cuanto a la defensa de los derechos humanos en México, sobre todo en la libertad de expresión. Sin embargo, subrayó que los

consejos municipales de planeación son una herramienta y un caso exitoso en términos de facilitar la participación. Según Montalvo, estos mecanismos son un “ganar-ganar” porque evitan problemas de largo plazo en términos de desarrollo, y dan voz a la sociedad civil. La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) es una asociación intermunicipal con el objetivo de brindar apoyo técnico a los ayuntamientos para la elaboración, gestión e implementación de programas y proyectos relacionados con el medio ambiente y el manejo de recursos naturales, así como la integración del paisaje biocultural del territorio. JIBIOPUUC vincula las comunidades con ONGs que les apoyan como The Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras dependencias en el estado. Ante el desinterés del gobierno federal en el medioambiente, han coordinado con la Secretaría Estatal de Desarrollo Sustentable, creada hace un par de años. Montalvo enfatizó la importancia de que los gobiernos locales colaboren con la sociedad civil, quienes son expertos en los asuntos que les impactan diariamente y ayudan a llenar brechas de información.

Los panelistas de esta mesa destacaron la importancia de la institucionalidad y de los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno para proteger los espacios de participación social. Específicamente, recomiendan codificar por ley estos mecanismos para que permanezcan entre administraciones. Asimismo, enfatizaron la importancia de transparencia en la información de medioambiente y cambio climático, y de la necesidad de que esté disponible para las OSCs. Finalmente, todos acordaron en la importancia de la educación desde la niñez hasta la adultez para concientizar a la población sobre los impactos de cambio climático para que todos puedan adaptarse mejor y participar en las políticas públicas.

Colaboración entre el sector privado y la sociedad civil

La participación de la sociedad civil y el sector privado es clave en la formación de estrategias para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Para ello es indispensable ir más allá de las consultas con partes interesadas e incorporar participación significativa en procesos abiertos

y transparentes en los que la opinión pública se considere seriamente.

Ximena Loría, directora de diplomacia climática para The Climate Reality Project Latinoamérica, explicó que cuando se hace referencia a la participación de sociedad civil, también hay que incluir al sector privado. Según Loría, la narrativa de que el cambio climático es solo un problema medioambiental ha aumentado la polarización del tema. Para facilitar el diálogo entre partes interesadas, se necesita posicionar el cambio climático como un asunto social y económico que se puede combatir solo con el trabajo conjunto. Hay potenciales aportes que pueden brindarse unos a otros, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, y el sector privado está desempeñando un papel clave en expandir la tecnología de descarbonización necesaria para la mitigación.

Loría mencionó que hay barreras puntuales que superar para poder aprovechar las sinergias. Primero, es crucial valorar la eficacia de los mecanismos tradicionales por su tasa de su uso y reconocer que, a pesar de buenas intenciones, los mecanismos que intentan facilitar la participación no son adecuados o apropiados para algunos grupos tradicionalmente marginalizados. Los caminos de participación para comunidades indígenas, por ejemplo, deben desarrollarse por o en colaboración con estas comunidades para funcionar correctamente, por lo que el involucramiento social es crítico desde la concepción misma de los mecanismos.

Es vital, según Loría, crear instrumentos y mecanismos que faciliten e incentiven la participación de los grupos tradicionalmente excluidos. Dichas estrategias deben ser adecuadas y contextualizadas considerando sus diferencias socioeconómicas. Con mecanismos contextualizados, la participación iría más allá de oponerse o apoyar a una estrategia, pudiendo apalancar un involucramiento activo con mayor compromiso.

Otro ejemplo de cómo se puede repensar y redefinir la participación ciudadana viene de las redes sociales, donde la sociedad se manifiesta ampliamente. Por ejemplo, durante las temporadas de elecciones, parece que más gente opina en redes sociales de la que vota. Con mecanismos para asegurar que las redes sociales formen parte de la participación oficial, la participación electoral podría incrementar.

Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil participan más y toman mejores decisiones para el colectivo cuando tienen acceso a información, están educadas,

sensibilizadas y empoderadas. Loría opina que estos cuatro factores deben ser vistos como prerrequisitos fundamentales.

Emmanuel Núñez, presidente de la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA), coincidió con Loría, explicando que la colaboración entre todos los actores puede dar lugar al despegue de tecnología innovadora y de bajas emisiones. Núñez explicó que cuando CAVEA comenzó a formarse como cámara, apenas si existían vehículos eléctricos en Argentina. Sin embargo, a través de años de colaboración, CAVEA ha logrado atraer interés y apoyo a la industria. Por ejemplo, creó un espacio de diálogo e intercambio llamado el Primer Foro Legislativo en la Cámara de Diputados, donde participaron los sectores de ciencia, academia y empresarial, para generar un entendimiento del estado de la industria y brindar esa información al gobierno como una guía para la formación de políticas. Otra colaboración clave fue con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que representa más de 300 municipios y trabaja directamente con la delegación de la Unión Europea. En esta colaboración, la Red les ayudó medir la huella ambiental de la industria, lo que será fundamental para asegurar que haga una diferencia real en términos de emisiones.

Hasta ahora, CAVEA sigue trabajando con la Secretaría de Industria en el gobierno nacional como parte de un consejo asesor que ayuda con la formulación de las políticas públicas. En este sentido, la participación del sector privado, no solo en forma de empresas privadas, pero también en asociaciones o cámaras de industrias, puede impulsar la acción climática. Núñez también discutió la importancia de trabajar con los gobiernos locales y provinciales, dado que la industria de la electromovilidad puede ser un motor de desarrollo local. Aún en los países más descentralizados es posible avanzar más por medio de la colaboración.

Gianluca Merlo, asesor técnico regional para la estrategia y política climática de América Latina y el Caribe para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), destacó el rol financiero del sector privado en torno al cambio climático. Según Merlo, “el reto es financiero;” se estima que implementar las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas* costará \$6 trillones de dólares. Por ejemplo, Chile tiene la meta de ser carbono neutral para el 2050. El PNUD hizo un estudio para estimar cuánto costaría lograr esta meta, y encontró que costará \$250 millones de dólares, de los cuales \$5.5 irán a descarbonizar el transporte. Esto significa que Chile tendría que invertir el 9 por ciento de su PIB anual. Dado que esta inversión no es viable, el capital del sector privado será imprescindible. El sector privado puede llenar las brechas entre lo que pueden cubrir los estados y el apoyo internacional para financiar la descarbonización. Sin embargo, en una región donde la inversión extranjera directa continúa disminuyendo y las tasas de interés y otros riesgos permanecen altos, los estados tienen que atraer el capital privado intencionalmente.

Programas de huella de carbono voluntarios, apoyados y estandarizados por el PNUD, están ya desempeñando un rol importante en facilitar que el sector privado forme parte de la lucha contra el cambio climático. Después de inscribirse en el programa, entidades públicas y privadas tienen un período de registro y contabilización de emisiones, y en el segundo año comienzan con la reducción anual de emisiones por medio de iniciativas propias o la compra de bonos de carbono en mercados internacionales o nacionales. El tercer paso del programa es crear metas de carbono neutralidad. Los estados pueden facilitar que el sector privado logre estas metas estableciendo un sistema nacional que ofrezca certificaciones de reducciones de emisiones. Varios países están liderando estas iniciativas: en Huella Chile, hay 1,400 empresas inscritas; en huella Perú, más de 1,350; y en Panamá, cerca de 200. Huella Ecuador recién se lanzó en 2023, y ya cuenta con cerca de 400 empresas con la meta de llegar a 1,000 a final del año. Es un sistema relevante no solo para monitorear emisiones, sino también para canalizar financiamiento hacia la descarbonización.

Antony Araya, director del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES), detalló cómo el sector privado puede reducir sus emisiones e impacto ambiental. La industria en América Latina emite menos que otros sectores como agricultura. Sin embargo, que el reto sea gestionable, solo acentúa la responsabilidad de la industria. Según Araya, la *Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe*

* Las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son los documentos que contienen los compromisos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París requiere que cada Parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas NDCs que se proponga lograr. Ver (<https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc>). Consultado en 26 de junio de 2023.

2021-2025⁴ del Banco Mundial debería ser el mandato para la industria y lo es para CEDES. Subrayó que el tercer principio, buscar soluciones técnicas favorables para aumentar la resiliencia y reducir las emisiones para que apoyen el crecimiento inclusivo, es de particular importancia.

La rama internacional de su organización, *The World Business Council for Sustainable Development*, también hizo una hoja de ruta examinando el rol del sector privado en mitigar la pérdida de naturaleza, creciente desigualdad, y emergencia climática. Dos de sus mayores éxitos a partir de esta agenda han sido el desarrollo de herramientas y la creación de canales para compartir mejores prácticas, así como la medición de la circularidad. Araya apuntó que hay que seguir desarrollando herramientas y compartiéndolas por múltiples canales. Asimismo, señaló que es crucial que la metodología para medir la circularidad sea robusta y estandarizada para todas las empresas, ámbito en el cual los entes certificadores desempeñan un papel clave. El trabajo de Araya en El Salvador consiste en encomiar a todas las empresas a usar una métrica estándar para medir su impacto ambiental. Esto también ayudará a los consumidores tomar decisiones informadas según el impacto de sus compras. La medición de la huella de carbono también tiene que ser un sistema estándar y certificado para poder comparar a las compañías de manera informada. Idealmente, el estándar debería ser global, por lo que es importante que gobiernos, las organizaciones certificadoras, el sector privado, trabajen juntos para asegurar la estandarización.

Los panelistas concordaron en la importancia de medir el impacto del sector privado para saber cómo mejorarlo. Araya y Núñez enfatizaron la importancia de educar y concienciar tanto al consumidor y como al productor en todas las etapas de la producción. El consumidor, con información accesible, debería idealmente educarse sobre el impacto climático y ambiental de sus compras, mientras que el productor debe saber de las oportunidades de reducir las emisiones de sus procesos y productos. Esto involucra a distintas partes de la sociedad: a las escuelas para educar los niños, a la sociedad civil para presionar a las compañías, y a las compañías en su gobernanza interna y al exterior presionando al gobierno para que cree marcos regulatorios para la estandarización de prácticas corporativas verdes.

LLAMADO A LA ACCIÓN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Para agencias encuestadoras y científicos sociales:

- Incluir preguntas sobre cambio climático en las encuestas de opinión e integrar series de tiempo para comprender el cambio.
- Incrementar la representatividad de las encuestas más allá de los centros urbanos, y complementar con instrumentos como entrevistas, especialmente donde existe una brecha digital.
- Sistematizar y estandarizar conceptos, metodologías y preguntas en distintas encuestas para tener datos de mejor calidad y comparables entre países y a lo largo del tiempo.
- Informar los análisis de opinión con instrumentos como la escucha y análisis de radios comunitarias.

Para gobiernos nacionales y locales:

- Combatir la desigualdad estructural, lo que a la vez mejoraría la confianza.
- Dar respuestas al cambio climático y a la participación desde un marco integral que considere la historia particular de cada lugar y las identidades marginalizadas.
- Reducir la brecha digital y de conectividad en el mundo rural y en los centros urbanos más aislados.
- Replicar, donde sea posible, el proceso participativo del Acuerdo de Escazú en otras cuestiones climáticas, incluyendo planes nacionales de adaptación y contribuciones nacionalmente determinadas.

- Promover el acceso a la información y la transparencia, así como estrategias de comunicación a través de medios culturalmente adecuados. Esto incluye comunicación fuera de redes sociales, otros idiomas, que llegue a personas analfabetas y que cierre la brecha de género.
- Fomentar la democracia participativa en todos los niveles de gobierno, más allá de las consultas, abriendo canales de intermediación y diálogo con activistas y OSCs, especialmente con grupos marginalizados, y liderando sinergias entre OSCs y científicos sociales para democratizar los datos y la ciencia.
- Incluir al cambio climático como un valor transversal en el gobierno, coordinando con ministerios, y distintos niveles y ramas de gobierno.
- Presentar un plan de corto plazo en el que los gobiernos se comprometan a cambios y resultados concretos en un solo término de gobierno.
- Implementar candados para que los instrumentos de participación y comunicación permanezcan entre administraciones a pesar de los cambios de liderazgo partidista.
- Garantizar la mejora de la protección a defensores de DDHH y la no criminalización de la protesta.
- Eliminar barreras institucionales para la participación y la exclusión estructural para garantizar al participación significativa y efectiva.
- Promover la educación ambiental y climática desde la niñez hasta la adultez para concientizar a la población sobre sus impactos y cómo incidir en políticas públicas.
- Reconocer cuando los mecanismos que facilitan la participación no son adecuados o apropiados para los grupos tradicionalmente marginalizados.

Estos mecanismos deben desarrollarse de forma colaborativa con comunidades sub-representadas desde su concepción.

- Crear mecanismos que vayan más allá de consultas (oponerse o apoyar a una estrategia o proyecto) para garantizar un involucramiento activo con mayor compromiso.
- Repensar cómo es posible formalizar la participación en redes sociales, por ejemplo, en procesos electorales.
- Establecer y promover cuatro prerrequisitos fundamentales para la participación: acceso a la información, educación, sensibilización y empoderamiento.

Para gobiernos, sector privado, y sociedad civil:

- Ampliar la narrativa de que el cambio climático es solo un problema medioambiental para considerarlo como un asunto social y económico que se puede combatir solo con el trabajo conjunto entre sectores.
- Incorporar la retroalimentación e ideas de cámaras empresariales y reunirlos con otros sectores como el académico para generar una mejor comunicación y entendimiento de las industrias verdes.
- Apoyarse en las Redes de Alcaldes y los gobiernos locales en la región.
- El sector privado puede llenar las brechas de financiamiento climático para cumplir con Contribuciones Nacionalmente Determinadas, mientras que los gobiernos deben atraer el capital privado. La sociedad civil puede informar dónde es más necesaria y urgente la inversión.
- El sector privado puede unirse a los programas de huella de carbono voluntarios, apoyados y estandarizados por el PNUD, para contabilizar y reducir emisiones en sus procesos y productos.
- El sector industrial debe no solo medir sus esfuerzos por reducir emisiones, sino abogar por estándares internacionales, robustos, transparentes y accesibles

a los consumidores, tarea en la cual, los entes certificadores desempeñan un papel clave.

- Educar y concienciar al consumidor sobre sus opciones, desde las escuelas hasta la adultez.
- La presión de la sociedad civil hacia compañías y gobiernos es clave para un cambio significativo y sostenido, pero es preciso diversificar las voces dentro de las OSCs para amplificar voces de mujeres, indígenas, y otros grupos subrepresentados.
- Las compañías pueden implementar cambios en su gobernanza interna (como incentivos a directivos para alcanzar metas de sostenibilidad) y al exterior presionando al gobierno para que cree marcos regulatorios para la estandarización de prácticas corporativas verdes.

Opinión sobre el Foro

Durante la transmisión del evento, EKLA KAS y el Diálogo realizaron una breve encuesta de tres preguntas para averiguar la utilidad de las mesas redondas ante los ojos del público, e informar siguientes ediciones del Foro.

Ante la pregunta, ¿el Foro promovió una mayor comprensión sobre la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas climáticas en América Latina?, el 92.5 por ciento de los participantes respondió "Sí, mucho," mientras que el 7.5 por ciento respondió "Más o menos." Según el 52 por ciento de los asistentes, el foro contribuyó a mejorar la comunicación entre la sociedad civil y los sectores público y privado; en tanto que el 48 por ciento respondió que el foro logró este objetivo solo parcialmente. Finalmente, el 96 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con que el Foro presentó posibles estrategias interregionales para abordar desafíos relacionados con la gobernanza climática inclusiva en América Latina. El 4 por ciento estuvo parcialmente de acuerdo.

Aunque alentadores, estos resultados también indican las oportunidades que estos espacios aún tienen para cerrar la brecha entre sectores y el trabajo por delante para forjar canales de comunicación serios y legítimos con la sociedad civil.

BIOGRAFÍAS DE PANELISTAS

MESA 1 - SOCIEDAD CIVIL LATINOAMERICANA: CORRESPONSABLE DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

MODERADORA



Alejandra Armesto es profesora investigadora en la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene un doctorado y una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos; una maestría en Ciencias Sociales por la FLACSO, sede México; un título de Magister en Administración Pública y una licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Su tesis de maestría de FLACSO México recibió el premio a la mejor tesis de posgrado de la Academia Mexicana de Ciencias y su tesis doctoral, el premio al mejor trabajo de campo de la American Political Science Association. En su investigación ha abordado temas de política distributiva, política subnacional, y federalismo fiscal. Una de sus más recientes publicaciones es: Preocupación por el cambio climático, condiciones económicas individuales y priorización del medioambiente en América Latina.

PANELISTAS

Olimpia Castillo Blanco es Bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es candidata a Maestra en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco. Desde 1995 ha dirigido la organización Comunicación y Educación Ambiental SC, integrante de la Iniciativa de Acceso México, coalición de organizaciones de la sociedad civil. Desde 2001, ha trabajado en la promoción del Principio 10 de la Declaración de Río en México, América Latina y el Caribe, y que derivó en haber logrado el Acuerdo de Escazú. Comunicación y Educación Ambiental S.C. ofrece distintos servicios de información, sensibilización y capacitación sobre medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.



Marcos Cuevas es Chief Product Officer de Citibeats, una plataforma que aprovecha los comentarios en tiempo real de los ciudadanos para ayudar a distintos actores a tomar decisiones informadas y anticipar sus necesidades. A través de la inteligencia artificial ética, Citibeats recopila información procesable sobre las preocupaciones de la población relacionadas con áreas de impacto clave, como el desarrollo sostenible, la inclusión financiera, la respuesta a desastres naturales, la migración, la política social, y la seguridad alimentaria. Cuevas es gerente de proyecto de alto nivel con un historial comprobado de éxito en el diseño y la gestión de proyectos y programas complejos. Su compañía, Citibeats, ha escrito reportes como Circular Economy in the Americas, Global Concerns on Climate Change and Water Availability, Colombia's Citizens Demands for a Transition Era, y Sustainable Tourism in the Americas.

Carmelo Polino es investigador académico de la Universidad de Oviedo. Es experto en Percepción y Comunicación de la Ciencia. Sus áreas de estudio son la sociología de la comunicación científica, la percepción social de la ciencia, y la participación ciudadana. Sus publicaciones incluyen: a) Cambio climático y opinión pública en América Latina; b) What do small farmers in Argentina think about genetically modified crops?; c) Información y actitudes hacia la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, entre otras. Ha participado como ponente en webinars como "América Latina frente al cambio climático: de lo urgente a lo importante."



MESA 2 - SIMBIOSIS PRODUCTIVAS: RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS

MODERADORA



Daniela Stevens es directora del Programa de Transición Energética y Clima del Diálogo Interamericano. Antes de unirse al Diálogo, Stevens fue profesora asistente en la División de Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia en Economía (CIDE) en la Ciudad de México, donde enseñó Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales. Stevens ha publicado ampliamente en revistas especializadas en medio ambiente y clima. Antes de trabajar en el CIDE, Stevens fue investigadora en la Universidad de Yale, donde realizó investigaciones sobre la formación de coaliciones en América Latina, la reforma energética en México y la reforma de las pensiones en Brasil. Como pasante de posgrado en el Instituto México del Wilson Center, realizó análisis sectoriales del sector eléctrico mexicano y examinó las implicaciones ambientales del T-MEC. De nacionalidad mexicana, Stevens tiene experiencia trabajando en administraciones públicas locales y federales. En el Ministerio Federal de

Seguridad Pública, su trabajo como enlace entre los sectores público y académico fue fundamental para lanzar un centro de investigación sobre seguridad, donde se desempeñó como subdirectora. Stevens tiene una maestría en ciencias políticas de El Colegio de México y un doctorado en Política Comparada de la Escuela de Asuntos Públicos de American University, donde también fue profesora adjunta de Política Comparada.

PANELISTAS

Carlos Asúnsolo es abogado y gerente de investigación y política pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. En este rol, trabaja en la colaboración en el diseño de estrategias de incidencia y litigios estratégicos en materia ambiental, diseño de proyectos y elaboración de documentos de investigación. Antes de esto, trabajó en la Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos como consultor para la libertad de expresión. Anteriormente, trabajó como abogado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la redacción de proyectos de sentencia y elaboración de dictámenes en materia de derechos humanos y proceso penal. Asúnsolo es Máster en Estudios Avanzados de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en Derecho y Máster en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.



Ana Toni es Secretaria Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Economista y politóloga, anteriormente fue Directora Ejecutiva del Instituto Clima y Sociedad de Brasil. La Secretaria Toni es cofundadora de GIP (Public Interest Management). Toni tiene una larga trayectoria de trabajo en las áreas de defensa de políticas públicas, medio ambiente y cambio climático, desarrollo sostenible y filantropía. Fue presidenta del Consejo de Greenpeace Internacional (2010-2017), directora de la Fundación Ford en Brasil (2003-2011) y de Ayuda en Acción Brasil (1998-2002). Ha sido miembro del consejo de varias organizaciones, como el Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE Brasil), WINGS, Institute for Technology & Society (ITS) y la Fundación Wikimedia. Recientemente ha sido miembro del consejo de Agência Pública, Gold Standard Foundation, ClimaInfo, Instituto República, Transparencia Internacional - Brasil y el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).

Liuca Yonaha es vicepresidente del Instituto Talanoa, una organización brasileña, apartidista e independiente cuyo objetivo es mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas nacionales. Con sede en Río de Janeiro, el Instituto se dedica a las políticas públicas, principalmente en el ámbito del cambio climático y el medio ambiente. Yonaha lleva 15 años trabajando como periodista y desarrollando estrategias digitales. Anteriormente, trabajaba para Política Por Inteiro, una iniciativa del Instituto Talanoa que busca observar las políticas públicas en su conjunto, tanto sectoriales como transversales, y desde la fase de formulación hasta la de revisión. También trabajó para MapBiomass, una red de colaboración formada por ONGs, universidades y startups tecnológicas, que revela las transformaciones del territorio brasileño a través de la ciencia, haciendo accesible el conocimiento sobre el uso de la tierra para buscar la conservación y combatir el cambio climático.



Rafael Gerardo Montalvo Mata es Presidente Municipal de Ticul en Yucatán, México. El Alcalde es Abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán y Presidente de la Asociación de Municipios Por Yucatán A.C. Anteriormente, fue Director de Acción de Gobierno para el Partido Acción Nacional, Director del DIF Municipal del Ayuntamiento de Ticul, y Director Jurídico del Ayuntamiento de Ticul. Con el liderazgo de Montalvo, Ticul se unió a la Red de Ciudades Sostenibles y Alcaldías para la Democracia de EKLA KAS, donde ha expuesto su trabajo sobre reforestación y concientización ambiental con el fin de fomentar acciones que logren un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente.

MESA 3 - DE LA PROPUESTA A LA PRÁCTICA: EXPLORANDO INSTRUMENTOS EN SECTORES PRODUCTIVOS

MODERADORA



Flavia Milano es Asesora de la Vicepresidencia de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja en temas de inclusión, participación ciudadana y sociedad civil. Está especializada en la inclusión y participación ciudadana en proyectos regionales sobre el clima y las industrias extractivas, especialmente en la Amazonía, para impulsar las agendas de desarrollo de los gobiernos. Milano dirigió el diseño y la implementación de una nueva Estrategia de Participación de la Sociedad Civil del Grupo BID, y es miembro del Consejo de Expertos en Participación Ciudadana del Banco Mundial. Como abogada especializada en derechos humanos, trabajó en el ámbito de negocios y los derechos humanos con empresas, gobiernos y comunidades en más de 20 países de África, América Latina, Europa y Norteamérica.

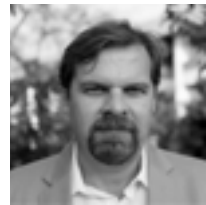
PANELISTAS

Ximena Loría es Directora de Diplomacia Climática de The Climate Reality Project Latinoamérica. Loría es una bióloga y activista costarricense, que fundó Misión 2 Grados, una ONG centrada en cuatro temas principales: sensibilizar a la gente sobre el cambio climático, apoyar el movimiento B corp, promover las políticas públicas y reforzar el desarrollo de los jóvenes líderes. Al principio de su carrera, Loría investigó el control de plagas biológicas en la agricultura. Trabajó con los agricultores de las comunidades rurales y mostró cómo la falta de educación y el acceso a los recursos hicieron que las personas fueran responsables y víctimas de la degradación ambiental en sus comunidades. En 2009, obtuvo una maestría en recursos naturales y paz en la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, donde se inspiró aún más en su trabajo para crear conciencia sobre el cambio climático. Después de graduarse, trabajó como profesora de biología y ecología para estudiantes de secundaria y universitarios, centrándose en empoderar a los jóvenes como agentes de cambio. Después de trabajar con el Proyecto de Realidad Climática, Loría fundó Misión 2 Grados y ahora se centra en la creación de una red climática juvenil activa y una agenda de reforma del cambio climático en el congreso costarricense. Está liderando un movimiento nacional de ciudadanos, organizaciones y empresas del sector privado para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica.



Emmanuel Núñez es Presidente de la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA). El Profesor Núñez imparte clases magistrales y organiza eventos sobre electromovilidad. Es coordinador de la mesa de medio ambiente, movilidad sostenible y energías renovables. En este rol, junto a un grupo de profesionales, pymes, colaboradores y entidades, trabaja para impulsar iniciativas de medioambiente, movilidad limpia, energías renovables y empleos verdes en la ciudad de Buenos Aires. También fue seleccionado por el Consejo Económico Social (Secretaría de Asuntos Estratégicos) de la Presidencia de la Nación para ser coordinador de un plan federal de formación en Movilidad Sustentable como parte de un proyecto de proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional.

Antony Araya es Director del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES). Es gerente de Ecoenergía Consultores y ha fungido como Director de CEDES por casi 10 años. Anteriormente se desempeñó como gerente de Geocycle El Salvador, donde inició y desarrolló del negocio de co-procesamiento en Holcim El Salvador. Ha sido ponente en temas como "Economía circular para un mundo mejor," y "Visión 2050 en El Salvador." Visión 2050 es una herramienta que produjo el WBCSD para encontrar respuesta a tres interrogantes: ¿Cómo sería un mundo sostenible?, ¿cómo podríamos alcanzarlo? y ¿qué papel pueden desempeñar las empresas para que avancemos más rápidamente hacia ese objetivo? Araya es especialista en gestión ambiental, y gestión y coprocesamiento de residuos y desechos municipales. Es Ingeniero Mecánico por la Universidad de Costa Rica.



Gianluca Merlo, Asesor Técnico Regional de la Estrategia y Política Climática para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para América Latina y el Caribe. Merlo es un ingeniero con amplia experiencia en los campos de la energía, el petróleo y el gas, y la gestión del agua. Desde 2006, ha sido consultor en proyectos de mitigación de emisiones, inventarios de gases de efecto invernadero, financiación del clima y proyectos de adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Antes de sumarse al PNUD, fue Director General del Programa Latinoamericano del Carbono en CAF. Gianluca posee un máster Cum Laude en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y una especialización en Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España.

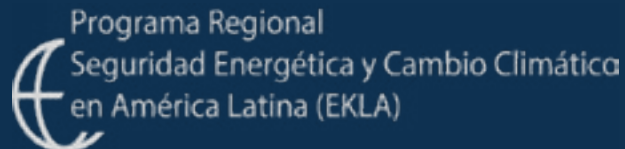
PALABRAS DE APERTURA Y CIERRE



Anuska Soares, Coordinadora de Proyectos del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, trabaja con proyectos relacionados a la transición a energías renovables, integración y seguridad energética en la región, ciudades inteligentes, preservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible, economía circular y cambio climático. Es graduada en ciencias económicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con MBA en Finanzas Corporativas por la PUC-RIO y MBA en Relaciones Internacionales por la Fundación Getúlio Vargas. Tiene sólida formación financiera y administrativa, experiencia en comercio exterior, especializada en análisis de contratos, técnicas de venta y coordinación de equipos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Marco temporal: Entenda o PL 490 aprovado na Câmara. (2023, 1 de junio). Folha de S.Paulo. Recuperado el 6 de julio de 2023, de <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/06/entenda-em-6-pontos-o-projeto-do-marco-temporal-aprovado-na-camara.shtml>
2. The Associated Press. (2022, 29 de septiembre). A new report labels Mexico as the world's deadliest spot for environmental activists. NPR. Recuperado el 6 de julio de 2023, de <https://www.npr.org/2022/09/29/1125854118/a-new-report-labels-mexico-as-the-worlds-deadliest-spot-for-environmental-activi>
3. Brazil is the country that most kills land activists, according to report by Global Witness. (2022, 11 de octubre). Conectas Direitos Humanos. Recuperado el 6 de julio de 2023, de <https://www.conectas.org/en/noticias/brazil-is-the-country-that-most-kills-land-activists-according-to-report-by-global-witness/>
4. Grupo Banco Mundial. (2022, 14 de septiembre). Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe, 2021-2025. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/1a7421c1-fa2b-58b9-b2ed-b8f6e07bf392/content>



Fundación Konrad Adenauer

**Programa Regional Seguridad Energética y Cambio
Climático en América Latina (EKLA)**

Calle Cantuarias 160, Oficina 202, Miraflores

Lima, Perú 15074

Energie-Klima-La@kas.de

kas.de/es/web/energie-klima-lateinamerika/home

@KASonline

@EKLA_KAS



Diálogo Interamericano

1155 15th Street NW, Suite 800

Washington, DC 20005

Tel: +1-202-822-9002

energy@thedialogue.org

thedialogue.org/energy

@dialogue_energy